

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la comunicación a un equipo investigador de un determinado centro universitario de los datos correspondientes a las personas pertenecientes al Comité Ejecutivo del partido consultante desde 1977 a la actualidad, a fin de que por dicho equipo se lleve a cabo un estudio de las carreras políticas en el sistema político español. El escrito de solicitud se refiere posteriormente no sólo a los datos de los órganos centrales del partido, sino también a los de sus distintas federaciones.

En primer lugar, dado que la información se referirá a hechos acaecidos en el pasado, pero que alcanzan una fecha reciente, tanto en su inicio como en el hecho de que se refieren incluso al momento presente, es preciso analizar si serán de aplicación a la cesión solicitada las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999.

Tal y como dispone el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal según su artículo 3 a) “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Por otra parte, el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, es claro al establecer que “este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas”, añadiendo que “no obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”.

El primer inciso reproducido no es sino la manifestación en la norma reglamentaria de la posición tradicionalmente mantenida por esta Agencia. Así la cuestión referente a la aplicabilidad de las normas de protección de datos a las personas fallecidas ha sido objeto de estudio reiterado por parte de esta Agencia en diversos informes y resoluciones en que se ha manifestado en la práctica totalidad de los supuestos en el sentido de considerar excluidos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 los datos referidos a quienes hubieran fallecido.

Así, incluso durante la vigencia de la derogada Ley Orgánica 5/1992, la Agencia analizó esta cuestión en informe de 20 de mayo de 1999, en que se planteaba la creación por una determinada entidad de un fichero de personas fallecidas a partir de los datos cedidos por diversos clientes, generándose así una suerte de “lista Robinson” de personas fallecidas a las que no procedía remitir publicidad. El citado informe sienta las bases de lo que luego sería doctrina habitual de la Agencia, indicando lo siguiente:

*“La citada Ley Orgánica (5/1992) tiene por objeto la protección de la “privacidad”. Así, según su artículo primero, la LORTAD tiene por finalidad la protección del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos, según se establece en el artículo 1 de la citada Ley Orgánica.*

*Sentados así los términos de la presente consulta, la resolución de la misma deberá efectuarse en función de la naturaleza misma del derecho protegido por la norma, lo que conduce a la necesidad de determinar si la muerte de las personas da lugar a la extinción del derecho a la protección de la “privacidad”, ya que el artículo 32 del Código Civil dispone que “ la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”, lo que determinaría, en principio, la extinción con la muerte de los derechos inherentes a la personalidad.*

*Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debe recordarse que la protección otorgada por la Ley frente a las intromisiones que supongan una vulneración de los derechos al honor y a la intimidad subsiste con posterioridad a la muerte de las personas. En ese sentido, cabe destacar que la Ley Orgánica 1/1985, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pone de manifiesto en sus artículos 4 a 6 que el fallecimiento no impide que por las personas que enumera el primero de los preceptos citados puedan ejercitarse las acciones correspondientes, siendo éstas la persona que el difunto haya designado a tal efecto en testamento, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos que viviesen al tiempo de su fallecimiento o, a falta de las personas anteriormente citadas, el Ministerio Fiscal.*

*Como anteriormente se expuso, la LORTAD tiene como objeto esencial (por imperativo del artículo 18.4 de la Constitución) la protección del honor y la intimidad, estableciendo a lo largo de su articulado las medidas precisas para asegurar que dicha protección se lleva plenamente a efecto.*

*Del análisis conjunto de las disposiciones contenidas en ambas Leyes se desprende que la legitimación conferida para el ejercicio de las acciones reconocidas en la Ley Orgánica 1/1982 existirá, en el ámbito de la LORTAD, cuando la actuación de las personas legitimadas tenga por directo y exclusivo objeto el ejercicio de las acciones tendentes a la protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de las personas fallecidas, no siendo posible la actuación de éstas en cualquier otro supuesto en que la finalidad de su actividad difiera de la antedicha protección.*

*Ello supone que, las personas legitimadas por la Ley Orgánica 1/1982 carecerán de legitimación para el ejercicio de los derechos reconocidos por la LORTAD, salvo en los supuestos en que esos derechos se ejerciten como instrumento para la realización de alguna de las finalidades protectoras indicadas que la Ley les atribuye. Fuera de estos supuestos no será posible entender que la actividad de los herederos o personas referidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982 se encuentra amparada por la LORTAD.*

*En el presente caso, tratándose de una cesión de datos producida entre dos entidades de naturaleza jurídico privada, resulta de aplicación, como se dijo, el artículo 11 de la LORTAD, que exige consentimiento del afectado por la cesión, salvo en los supuestos excluidos por el artículo 11.2. No siendo, lógicamente, posible la prestación del consentimiento por parte del afectado, deberá determinarse si es posible la sustitución de dicho consentimiento por el de las personas legitimadas por el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982”.*

Quiere todo ello decir que la problemática planteada por la presente consulta, en lo que a la garantía del derecho fundamental a la protección de datos se refiere, únicamente resulta relevante cuando se esté haciendo referencia a datos relativos a personas que no hubieran fallecido, dado que en caso de fallecimiento no son aplicables las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, salvo en lo previsto en el inciso segundo del artículo 2.4 del Reglamento y la posible solicitud de la cancelación de los datos, si ello fuera procedente, por las personas enumeradas en dicho precepto.

A sensu contrario, la información concerniente a personas físicas identificadas o identificables que no hubieran fallecido sí se encontraría dentro del ámbito de aplicación de las normas reguladoras del derecho fundamental a

la protección de datos, siendo entonces aplicable lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo.

Por tanto, y como punto de partida, dado que es seguro que existan personas afectadas que no hubieran fallecido al tiempo de procederse al tratamiento de los datos a los que se refiere la consulta debe concluirse que el fichero al que se viene haciendo referencia sí se encontraría sometido a las normas de protección de datos.

Lo anterior conduce a la necesidad de analizar si la comunicación planteada resultará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. A tal efecto, y en cuanto al tratamiento de los datos, debe recordarse que el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”, añadiendo el artículo 6.2 que “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

En cuanto a la divulgación de los datos a través de Internet, la misma implicará una cesión de los datos relativos a las personas que ocupasen los cargos a los que la consulta se refiere, estableciendo como criterio general el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Por ello, será necesario, como regla general, el consentimiento del interesado, con las excepciones que no obstante establece el artículo 11.2 de la Ley Orgánica.

Dicho esto, ha de tenerse en cuenta el carácter histórico de la información a la que se refiere la consulta, debiendo a tal efecto recordar que esta Agencia se ha pronunciado acerca de la posibilidad de tratamiento, con fines históricos, científicos o estadísticos, de datos que formarían parte del patrimonio documental, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español que, tras

establecer su artículo 57 que los documentos del patrimonio documental “serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos”, añade, en su apartado 1 c), que “los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”.

Ciertamente, el precepto peca de cierta ambigüedad, dado que no establece claramente a qué supuestos se está haciendo referencia en el segundo de los casos referidos a personas cuya fecha de fallecimiento no sea conocida. Así, es posible considerar que será en todo caso necesario que conste el fallecimiento de la persona, aunque su fecha no sea conocida o que la expresión “en otro caso” se refiere a cualesquiera supuestos, conste o no la circunstancia del citado fallecimiento.

No obstante, esta Agencia ha venido tradicionalmente considerando que debe prevalecer la segunda de las interpretaciones señaladas; es decir, en caso de que no conste si una persona ha fallecido o no, los datos podrán ser tratados con fines históricos científicos o estadísticos una vez hayan transcurrido cincuenta años desde la fecha del documento.

Por este motivo, sería posible la difusión de la información a la que se refiere la consulta en caso de que la misma se encontrase en uno de los supuestos siguientes:

- Se refiriese a personas fallecidas al tiempo de la difusión.
- Se refiriese a personas no fallecidas, pero hubieran transcurrido más de cincuenta años desde la fecha del documento.

En el presente supuesto, dado que la información que se solicita se refiere a datos posteriores a 1977 no será posible que la misma se encuentre en la segunda de las situaciones indicadas, por lo que, salvo en lo que se refiera a datos de personas fallecidas únicamente será posible la comunicación de los mismos al equipo de investigación si se contase con el consentimiento de los interesados.

